

Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos Rol N° 252.233-23, se ha conocido el recurso de queja impetrado por el abogado Rodrigo Lazo Parada, en representación del querellante David Trajtmann Kristal, en los autos sobre defraudación y simulación de contrato en perjuicio del acreedor, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, RIT N° 5.220-2020; en contra de los integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, Ministras señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y señora Elsa Barrientos Guerrero y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo, quienes con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, con falta y abuso grave, decidieron rechazar la solicitud de alegatos por vía remota solicitada por esa misma parte, por estimarla extemporánea, para luego, sin la comparecencia de esa misma parte, decidieron revocar la sentencia dictada por el referido Juzgado de Garantía, que rechazó la petición de sobreseimiento definitivo deducida por los querellados León Hasson Torres, Daniela Tamara Tawricky Glodzweig, René Arturo Rubio Estay, Gabriel Gálvez Lara y Adela Goldzweig Zurich y, en su lugar, acogieron dicha petición y declararon el sobreseimiento definitivo parcial de la causa, por estimar que concurre la causal prevista en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

Sostiene el quejoso que ambas resoluciones fueron dictadas con falta o abuso susceptible de ser corregido por esta vía disciplinaria, denunciando, en primer lugar, aquellas contenidas en la resolución que desestimó la solicitud de alegatos vía remota presentada por esa misma parte, por entenderla extemporánea, al haber sido ingresada fuera del plazo de dos días previos a la audiencia, estatuidos en el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 27 del Auto Acordado N°41 de la Excma. Corte Suprema, de 13 de marzo de 2020, preceptos que el quejoso estima no aplicables en la especie, menos de manera parcial como se realizó por los jueces recurridos, en consideración a la materia de que se trata



-penal- y las particulares reglas previstas en el Código Procesal Penal para la vista de los recursos (en audiencia pública, sin mediar relación, con plazos de días corridos, sin que se requiera el anuncio previo de alegatos y sin otra formalidad más que la sola presencia de los intervinientes), de las que infiere que los preceptos en que se apoya la resolución recurrida -que entiende compartir la naturaleza de sentencia interlocutoria porque fija derechos permanentes en favor de las partes y sirve de base para la dictación de la sentencia definitiva-, se oponen a lo establecido en el Código Procesal Penal sobre el particular.

Esgrime que resultaba aplicable, en la especie, el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales y artículo 358 del Código Procesal Penal, preceptos que, de haber sido aplicados por la magistratura recurrida, habría sido admitida su comparecencia a la audiencia en la forma solicitada.

Por consiguiente, sostiene que la falta o abuso estuvo dada por la contravención formal a la ley, interpretación errada de la misma y falsa apreciación de los antecedentes del proceso, por la errónea aplicación del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, lo que condujo a que no fuera admitida su comparecencia a la audiencia en que se conoció la apelación deducida por la parte querellada, en circunstancia que debió ser aplicado el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, falta o abuso que se evidencia, además, en que la misma Corte de Apelaciones, respecto de solicitudes análogas planteadas por ella, para comparecer a las audiencias fijadas previamente para el conocimiento del mismo recurso, las admitió.

En segundo lugar, denuncia la falta o abuso cometida por los jueces recurridos al dictar la sentencia que declaró el sobreseimiento definitivo solicitado por las defensas apelantes, las que hace consistir en haber dejado de escuchar sus alegaciones, resolviendo sin que los autos estuvieran en estado de asumir tal decisión, pues de habersele permitido alegar, se habría establecido que no se cumplía con el estándar necesario para sobreseer el proceso, dado que los hechos fundantes del delito de celebración de contratos simulados, no fueron investigados



por el Ministerio Público. Además, sostiene que, si bien el persecutor ejerció la facultad de no perseverar, la parte querellante había solicitado dentro de plazo la reapertura de la investigación, para practicar más de veinte diligencias, todo lo cual habría incidido en resolver que la causa no estaba en condiciones de ser sobreseída.

Solicita se acoja el recurso de queja, se anulen las sentencias recurridas y resolver que la causa quede en estado de ser vista, por una Sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones de Santiago e imponer a los jueces censurados las sanciones que se consideren adecuadas.

Informando los jueces recurridos, señalan que con fecha dieciocho de diciembre del año pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció de los recursos de apelación interpuestos por los abogados defensores, don Gabriel Gálvez Lara y don Felipe Moraga Marinovic, y por el abogado defensor, don René Arturo Rubio Estay, en representación de León Hasson Torres, de Daniela Tamara Tawricky Glodzweig, de René Arturo Rubio Estay, de Gabriel Gálvez Lara y de Adela Goldzweig Zurich, respectivamente, en contra de la decisión adoptada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, por el 8° Juzgado de Garantía de esta ciudad, en los autos RIT 5.220-2020, que negó lugar al sobreseimiento definitivo parcial de la investigación.

En dicha audiencia se conoció también, en forma previa a la vista de la causa, de la petición de alegatos vía zoom del abogado don Rodrigo Lazo Parada, por la parte querellante, don David Trajtmann Kristal. Esta solicitud fue desestimada, por extemporánea. Agrega que posteriormente, el referido profesional promovió un incidente de nulidad en contra de la resolución antes individualizada, el que fue desestimado, por los motivos que en ella se expresan.

En relación con los recursos de apelación formulados en contra de la decisión de diez de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el 8° Juzgado de Garantía de esta ciudad, en los autos RIT 5.220-2020, los integrantes de la Sala razonando previamente para ello del modo en que se explicita en la resolución que por esta vía se impugna, procedieron a revocarla y, en consecuencia, declararon el



sobreseimiento definitivo parcial de la causa, de conformidad al motivo previsto en la letra a) del artículo 250 del Código Procesal Penal, respecto de León Hasson Torres, de Daniela Tamara Tawricky Glodzweig, de René Arturo Rubio Estay, de Gabriel Gálvez Lara y de Adela Goldzweig Zurich.

Hace presente que la resolución que negó lugar a la petición de alegatos del abogado Lazo Parada no reviste la naturaleza que permita a quien se sienta agraviado por ella, impugnarla por la vía del recurso de queja.

En lo que atañe a la resolución que, revocando la decisión de primera instancia, dispuso el sobreseimiento definitivo parcial de la causa, se sustentó en los motivos que en ella misma se expresan y, en todo caso, si no se comparte el criterio antes descrito, no parece que se haya cometido alguna falta o abuso grave, pues se trata de sustentar una determinada tesis jurídica, usando de las reglas de interpretación que entregan los artículos 19 al 24 del Código Civil.

Añade que no puede la parte perdedora utilizar el recurso de queja como una nueva instancia de reclamación, pues se trata de un medio disciplinario para reprimir graves abusos que puedan cometer los jueces al dictar sentencia.

Encontrándose en estado, se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, el compareciente refiere que en el proceso en que incide la queja, Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 5.895-2023, por resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, los jueces recurridos rechazaron la solicitud de anuncio de alegatos vía remota por él presentada, ahora quejoso, planteada mediante escrito ingresado al proceso el día anterior, a raíz de lo cual no se le permitió ejercer su derecho en estrados, circunstancia que determinó que la resolución apelada fuera revocada, declarándose el sobreseimiento definitivo de la causa. Refiere que ambas resoluciones fueron dictadas con falta o abuso graves, desde que la primera de ellas se sustenta en el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, no aplicable en la especie, pretiriéndose el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, que debió ser aplicada; en tanto la



segunda, de manera ilegal, se le privó de su derecho a alegar remotamente, en defensa de los intereses que representa.

Segundo: Que, como cuestión previa, conviene tener en cuenta que el recurso de queja, en tanto persigue modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales, pronunciadas con falta o abuso, constituye un medio extraordinario destinado a corregir la arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho.

Esta vía de impugnación, prevista en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, sólo procede sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación o definitivas.

Tercero: Que la resolución dictada por la magistratura recurrida, que rechaza la solicitud planteada por el abogado en representación de la parte querellante de alegar de manera remota, contra la que se recurre, no comparte la naturaleza de aquellas susceptibles de ser impugnada a través de este recurso extraordinario, desde que no resuelve un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, o sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva; tampoco pone fin al juicio o a la instancia, ni hace imposible su continuación, sino se trata de un decreto que sólo tiene por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso, en los términos previstos en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, razón suficiente para desestimar el recurso de queja deducido en su contra.

Cuarto: Que, también deberá ser desestimado el recurso de queja deducido en contra de la sentencia que declaró el sobreseimiento definitivo parcial de los querellados que en ella se individualiza, sustentado en que fue dictada tras celebrarse la audiencia convocada al efecto, privándosele del derecho a comparecer a alegar de manera remota y a ser oído, pues esa determinación fue dictada en virtud de una resolución fundada en el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, exégesis que según ha sostenido reiteradamente este Tribunal,



hace que una determinada posición frente al sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la vía disciplinaria, pues se trata del ejercicio del derecho privativo que la ley confiere a los jueces en la interpretación de los preceptos legales aplicables a las situaciones de que deben conocer.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, de la revisión del expediente digital del proceso Rol 5.895-2023 de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ahora quejoso oportunamente promovió incidente de nulidad procesal de la vista de la causa de fecha 18 de diciembre del año dos mil veintitrés, fundado en que se anunció por zoom para alegar mediante escrito presentado el día anterior, a raíz de lo cual no se le permitió ejercer su derecho en estrados.

Este incidente fue rechazado por resolución dictada el veintiocho de diciembre siguiente, en virtud de las siguientes consideraciones:

“3º.- Que como se sabe, el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en vigencia desde el 11 de diciembre de 2022, expresamente señala: “...cualquiera de las partes podrá solicitar alegatos por vía remota mediante videoconferencia hasta dos días antes de la vista de la causa ...”. La citada norma es aplicable a la vista de los recursos en materia penal, de conformidad a lo previsto en el artículo 52 del Código Procesal Penal y es concordante, además, con lo estatuido en el artículo 27 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema N° 41, de 13 de marzo de 2020, que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 12 de septiembre de este año, pronunciándose respecto de una presentación del Colegio de Abogados, la Corte Suprema corroborando la disposición precedentemente citada resolvió que las solicitudes de alegatos por videoconferencia respecto de “causas que estuvieren en tabla los días lunes o aquellas en que el primer día de la semana sea feriado, se dispone que tales presentaciones se podrán realizar hasta las 23:59 horas del día viernes en que se confecciona la tabla para el primer día hábil de la semana siguiente”;



4°.- Que según se advierte del sistema computacional y de lo certificado por el Relator de la causa el día de su vista, la petición de alegato vía zoom del incidentista se ingresó a las 14:43 horas del día 17 de diciembre pasado. Luego, según certificó el relator Paul Boulou Ormazábal, ministro de fe a estos efectos, el abogado recurrido, don Rodrigo Lazo Parada, no compareció tampoco personalmente a la audiencia anunciada para la vista de su arbitrio;

5°.- Que, así las cosas, basta para rechazar la incidencia en comento el hecho de que el vicio invocado no es tal.”.

Sexto: Que la sentencia interlocutoria antes transcrita, que se encuentra firme y ejecutoriada y, por tanto, goza de efecto de cosa juzgada, no ha sido impugnada en el presente recurso de queja, lo que deja en evidencia que el perjuicio invocado como fundamento del mismo, no puede ser solucionado a través de la acción disciplinaria intentada, amén que deja en evidencia el ejercicio hermenéutico efectuado por la magistratura recurrida, diverso al planteado por el quejoso, lo que, como se señaló, no puede configurar falta o abuso susceptible de ser revisado a través del recurso de queja impetrado.

Séptimo: Que, de igual modo, cabe también desestimar la pretendida falta de oportunidad del sobreseimiento, por cuanto este tribunal ha manifestado en forma reiterada que el artículo 93 del Código Procesal Penal, referido a los derechos y garantías del imputado, consagra expresamente en su letra f), la facultad de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 7° del estatuto procesal penal, conforme con lo cual la petición que, en la especie, formuló en tal sentido las defensas de los querellados resulta plenamente oportuna, siendo, en consecuencia, igualmente oportuna la decisión del tribunal de alzada por la que se revocó el rechazo de primer grado a dicha solicitud y se accedió al sobreseimiento definitivo parcial, máxime si la mencionada letra f) del artículo 93, también consagra como derecho de todo imputado el de recurrir contra la resolución que rechazare el sobreseimiento



definitivo de la causa.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 540, 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **SE RECHAZA** el recurso de queja, interpuesto por el abogado Rodrigo Lazo Parada, en representación del querellante David Trajtmann Kristal.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°252.233-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R. y los Abogados Integrantes Sres. Álvaro Vidal O. y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 16 de abril de 2025.



En Santiago, a dieciséis de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

